

NOMENCLATURA : 1. [40] Sentencia  
JUZGADO : 29º Juzgado Civil de Santiago  
CAUSA ROL : C-5583-2020  
CARATULADO : RETAMALES/FISCO DE CHILE / CONSEJO DE  
DEFENSA DEL ESTADO

Santiago, veintiuno de Febrero de dos mil veintidós

VISTOS:

César Antonio Barra Rozas, abogado en representación de Luis Nibaldo Retamales Urtubia, profesor, ambos domiciliados en calle Blanco N° 1623, oficina 1602, Valparaíso, y avenida Santa Rosa N° 170 oficina 607, Santiago, deduce demanda de indemnización de perjuicios, en contra del Fisco de Chile, representado legalmente por María Eugenia Manaud Tapia, Presidenta del Consejo de Defensa del Estado, con domicilio en Agustinas N° 1687, Santiago.

En cuanto a los hechos, señala que de acuerdo al relato de su representado, el 11 de Septiembre de 1973 se encontraba en Santiago, por cuanto un año antes había resultado elegido como dirigente de la Confederación Nacional Campesina e Indígena Ranquil, describiendo su actividad sindical durante los primeros años, hasta que el 20 de octubre de 1978 se publicó en el Diario Oficial el Decreto Ley número 2346, que en su artículo primero prohibió y declaró ilícitas las actividades de la Confederación Ranquil.

Indica que después de navidad del año 1975 asistió a una reunión del Consejo Directivo de la Confederación Ranquil y tomaron algunos acuerdos respecto a la salida, ya que eran dirigentes públicos y el riesgo de ser requeridos siempre estuvo presente. A la salida, fue seguido por agentes, quienes lo detuvieron, encañonaron y trasladaron a un auto, donde fue hostigado y amenazado, siendo llevado a un lugar de prisión y tortura, que luego se enteró era "Villa Grimaldi", donde lo mantuvieron con la vista vendada y totalmente desnudo. Lo golpearon y obligaron a escuchar torturas a otros detenidos. También fue interrogado y amenazado con mayores tormentos. Le aplicaron corriente eléctrica amarrado a un "catre" y simulacros de fusilamiento.

Luego de días de torturas lo trasladaron al recinto "Cuatro Álamos" y luego a "Tres Álamos", lugar donde recibió varias visitas sindicalistas, en general, y de dirigentes agrarios, pero también de la Iglesia Católica a través del sr. Obispo Auxiliar de Santiago, Monseñor Enrique Alvear.

Agrega que a fines de febrero o comienzos de marzo (no señala año), en buses de fuerzas especiales de Carabineros y con un numeroso contingente de apoyo, fueron trasladados al campo de prisioneros de Puchuncaví (Melinka), en la



Foja: 1

Región de Valparaíso, donde los marinos los amenazaban, hacían allanamientos sorpresivos a las cabañas, entre otras acciones de opresión para mantener un ambiente tenso.

Señala que, finalmente, en mayo de 1976 su nombre apareció en una lista de presos políticos que serían liberados, sin explicación, por lo que fue trasladado de vuelta a Tres Álamos en Santiago. Algunos papeleos y firmas, además, le tomaron fotos de frente y de perfil y luego franquearon la salida.

Explica que el Estado de Chile lo hizo su víctima, enfatizando que nunca tuvo una posibilidad real de defensa, igual a la indefensión vivida en los recintos secretos. Salió libre, pero a lidiar con las secuelas. Sentía una tremenda inseguridad de vida, sabía que en el día lo podían detener en cualquier lugar, y en la noche sus casas parecían celdas de una gran prisión a la que podían acceder libremente los represores. No creía en nada ni en nadie y temía volver a vivir lo mismo. Las noches eran eternas y su dormir a saltos y poblado de pesadillas. Trataba de reiniciar su vida, pero era muy difícil, sino imposible, ya que la DINA se dejaba ver en su vigilancia tanto a las organizaciones como a los dirigentes que habían estado detenidos. Agrega que pasaron los meses y los años antes de serenar el espíritu y ver la vida con otros ojos. La “parrilla” le dejó marcas físicas, que más pronto dejó atrás, si las compara con las de carácter psíquico que arrastró por años. Aún hoy lo recuerda con inquietud. Concluye que definitivamente lo sufrido cambió su vida y lo privó de un desarrollo personal y familiar normal, teniendo en cuenta que a la época de los hechos tenía 23 años de edad. Reconoce algunas medidas de reparación después de 1990, pero en lo personal, cree que no ha sido resarcido de manera equivalente al daño que provocó esa violación de sus derechos.

Refiere las normas contenidas en los artículos 6, 7 y 38 de la Constitución de Política de la República y la Ley de Bases Generales de la Administración del Estado, en su regulación de la responsabilidad del Estado.

Indica que la responsabilidad del Estado es de derecho público, habiéndolo declarado así la Excm. Corte Suprema, de acuerdo a jurisprudencia que reproduce en el libelo. Luego hace una referencia a la doctrina en este mismo sentido.

Reflexiona sobre el carácter de crimen de lesa humanidad que otorga a los ilícitos relatados en autos, a la luz del derecho internacional, también recogido por la ley interna, indicando que nos encontramos en el caso de marras frente a un ilícito que constituye un delito de lesa humanidad, por lo cual el Estado de Chile no puede eludir su responsabilidad civil por los padecimientos y dolores irrogados, evadiendo la normativa humanitaria internacional de naturaleza ius cogens.

En cuanto a la imprescriptibilidad de la acción de reparación deducida en estos autos, hace referencia a varias sentencias pronunciada por Tribunales de la República, en los cuales se indica la inaplicabilidad de las normas del derecho común ante casos como los de la acción deducida en estos autos.

Respecto del daño moral proveniente de la vulneración a los derechos fundamentales, indica que la mayoría de la jurisprudencia considera que el daño moral consiste, equivale y tiene su fundamento en el sufrimiento, dolor o molestia



Foja: 1

que el hecho ilícito ocasiona en la sensibilidad física o en los sentimientos o afectos de una persona. Respecto de la prueba, tanto la doctrina como la jurisprudencia mayoritaria coinciden en señalar que el daño moral no requiere prueba. Según la opinión dominante, basta que la víctima acredite la lesión de un bien personal para que se infiera del daño, así por ejemplo la calidad de hijo de la víctima que fallece en un accidente. También hace referencia al deber de responder por los daños irrogados por vulneración de los derechos fundamentales en el ámbito internacional, mencionando a la Convención Interamericana de Derecho Humanos y cómo ha sido aplicado en nuestros tribunales, así como en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, explicando que es claro que Luis Nibaldo Retamales Urtubia ha tenido toda una vida de sufrimiento y angustia, irrogada por las diversas vejaciones, torturas físicas y psicológicas cometidas en su persona por agentes del Estado. Y si bien el Estado ha efectuado distintos esfuerzos, una vez terminado el régimen militar, de resarcimiento de perjuicios mediante pensiones asistenciales y simbólicas, dichas reparaciones han tenido un carácter general buscando una solución uniforme, abstracta, sin considerar la situación específica y particular de cada ser humano que haya sido sujeto a apremios ilegítimos en dicho período, no configurándose lo dispuesto en el artículo 63.1 de la Convención Interamericana de Derecho Humanos que obliga al pago de una justa indemnización a la parte lesionada.

Explica que la cifra aquí propuesta no es producto de un simple subjetivismo, ni menos de un capricho o arbitrariedad. El Estado de Chile, de mutuo propio, ya ha ofrecido a determinadas familias de víctimas de violaciones graves a los derechos humanos, a título indemnizatorio, el pago de la suma de un millón de dólares. Por lo menos, así ha sucedido en los casos de Orlando Letelier y de Carmelo Soria y, en su opinión, la suma de esta demanda no es ajena a esa realidad, por lo que solicita se condene al pago de la suma total de \$300.000.000 (trescientos millones de pesos), más intereses y reajustes legales, con costas; o, en subsidio, al pago de las sumas y cantidades de dinero, y/o prestaciones, que se estime de justicia y equidad, de acuerdo al mérito de autos, debidamente reajustadas y con intereses, con costas.

Con fecha 8 de julio de 2020 se notifica la demanda de autos.

Con fecha 27 de julio de 2020 contesta el Fisco de Chile.

Alega la excepción de reparación integral, toda vez que la demanda sería improcedente, porque el actor ya habría sido indemnizado. Reflexiona acerca del marco general de los resarcimientos ya otorgados y la complejidad reparatoria, señalando que los objetivos a los cuales se abocó preferentemente el gobierno del entonces Presidente Patricio Aylwin, en lo que respecta a la justicia transicional, fueron los siguientes: "a) el establecimiento de la verdad en lo que respecta a las violaciones a los derechos humanos cometidas en la dictadura; b) la provisión de reparaciones para los afectados; y, c) el favorecimiento de las condiciones sociales, legales y políticas que prevean que aquellas violaciones puedan volver a producirse". En lo relacionado con el segundo objetivo, plantea que la Comisión Verdad y Reconciliación o "Comisión Rettig", formuló en su informe final una serie de "propuestas de reparación", entre las cuales se encontraba una "pensión única



Foja: 1

de reparación para los familiares directos de las víctimas" y algunas prestaciones de salud. Dice que dicho informe sirvió de causa y justificación al proyecto de ley que el sr. Presidente de la República envió al H. Congreso, que luego se convertiría en la Ley N° 19.123, que creó la Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación. El mensaje de dicho proyecto de ley fue claro al expresar que por él se buscaba, en términos generales, "reparar precisamente el daño moral y patrimonial que ha afectado a los familiares directos de las víctimas". Por su parte y en lo relativo a la forma en que se entendió la idea de reparación, precisa que el ejecutivo, siguiendo el informe de la Comisión, entendió por reparación: "un conjunto de actos que expresen el reconocimiento y la responsabilidad que le cabe al Estado en los hechos y circunstancias que son materia de dicho Informe".

Agrega que a dicha reparación ha de ser convocada y concurrir toda la sociedad chilena en "un proceso orientado al reconocimiento de los hechos conforme a la verdad, a la dignificación moral de las víctimas y a la consecución de una mejor calidad de vida para las familias más directamente afectadas".

Concluye que la compensación de daños morales y la mejora patrimonial son dos claros objetivos de estas normas reparatorias.

Asimismo, que una vez asumida esta idea reparatoria, la Ley N° 19.123 y otras normas jurídicas conexas han establecido diversos mecanismos mediante los cuales se ha concretado esta compensación, que explican cómo el país ha afrontado este complejo proceso de justicia transicional, según asevera.

Indica que la reparación a las víctimas de violaciones a los derechos humanos se ha realizado principalmente a través de tres tipos de compensaciones: i) reparaciones mediante transferencias directas de dinero; ii) reparaciones mediante la asignación de derechos sobre prestaciones estatales específicas; y, iii) reparaciones simbólicas.

En cuanto a la reparación mediante transferencias directas de dinero, manifiesta que diversas leyes la habrían establecido, incluyendo a las personas que fueron víctimas de apremios ilegítimos. Destaca que en términos de costos generales para el Estado, este tipo de indemnizaciones ha significado, al mes de diciembre de 2015, en concepto de: a) pensiones, la suma de \$199.772.927.770, como parte de las asignadas por la Ley N° 19.123 (Comisión Rettig); b) pensiones por \$419.831.652.606, como parte de las asignadas por la Ley N° 19.992 (Comisión Valech); c) bonos por \$41.856.379.416, asignados por la Ley N° 19.980 (Comisión Rettig) y otros \$22.205.934.047 por la referida Ley N° 19.992; d) desahucios (bono compensatorio) por la suma de \$1.464.702.888, asignados por medio de la Ley N° 19.123; y, e) bono extraordinario (Ley N° 20.874) por la suma de \$21.256.000.000. En consecuencia, al mes de diciembre de 2015 el Fisco habría desembolsado la suma total de \$706.387.596.727.

En torno a las reparaciones específicas, señala que las actoras habrían recibido beneficios pecuniarios al amparo de las leyes N° 19.234 y 19.992 y sus modificaciones. Precisa que la Ley N° 19.992 estableció una pensión anual reajutable de \$1.353.798, para beneficiarios menores de 70 años; de \$1.480.284



«RIT»

Foja: 1

para beneficiarios de 70 o más años de edad; y de \$1.549.422 para beneficiarios mayores de 75 años.

Luego de referirse a las otras formas de reparación implementadas, sostiene en materia de identidad de causa entre lo que se pide en estos autos y las reparaciones realizadas, que de todo lo expresado podría concluirse que los esfuerzos del Estado por reparar a las víctimas de DD.HH no solo han cumplido los estándares internacionales de justicia transicional, sino que han provisto indemnizaciones razonables con nuestra realidad financiera. Por tanto, considerando que la acción se basa en los mismos hechos y se pretende con ella se indemnicen los mismos daños que han inspirado el cúmulo de acciones reparatorias enunciadas, opone la excepción de pago, por haber sido indemnizadas las demandantes en conformidad a la leyes N° 19.123 y 19.980.

En subsidio, opone la excepción de prescripción extintiva, que funda, en síntesis, en que según lo que se expuso en la demanda, la detención ilegal, prisión política y torturas que sufrió el actor ocurrió “después de la Navidad de 1975”. Agrega que aun entendiendo suspendida la prescripción durante el período de la dictadura, por la imposibilidad de las víctimas o sus familiares de ejercer las acciones legales correspondientes ante los Tribunales de Justicia, sino hasta la restauración de la democracia, a la fecha de notificación de la demanda, esto es, al 8 de julio de 2020, había transcurrido en exceso el plazo de prescripción extintiva que establece el artículo 2332 del Código Civil.

Alega la excepción de prescripción de 4 años establecida en dicha norma legal y, en subsidio, la excepción de prescripción de 5 años del artículo 2515, ya que entre la fecha en que se habría hecho exigible el derecho a la indemnización y la notificación, igualmente transcurrió con creces el plazo legal.

Sobre el particular, indica que por regla general todos los derechos y acciones son prescriptibles y que, por ende, la imprescriptibilidad es excepcional y requiere siempre declaración explícita, que en este caso no existe. En el mismo sentido, considera que pretender que la responsabilidad del Estado sea imprescriptible, sin que exista un texto constitucional o legal expreso que lo disponga, llevaría a situaciones extremadamente graves y perturbadoras.

Recuerda que la prescripción es una institución universal y de orden público, manifestando que las normas del Título XLII del Libro IV del Código Civil que la consagran y, en especial, de su Párrafo I, se han estimado siempre de aplicación general, para todo el ordenamiento jurídico y no solo para el ámbito privado. Posteriormente, dice que la jurisprudencia existente en la materia, citando fallos de la Excma. Corte Suprema que a su entender tendrían aplicación para el caso, no otorgarían a la indemnización de perjuicios, cualquiera sea su origen o naturaleza, un carácter sancionatorio, de modo que jamás puede de cumplir un rol punitivo para el obligado al pago, por ser su contenido netamente patrimonial. Así planteado, postula que no debe sorprender ni extrañar que la acción destinada a exigirla esté -como toda acción patrimonial- expuesta a extinguirse por prescripción.



«RIT»

Foja: 1

Asegura que la imprescriptibilidad conforme al derecho internacional de los derechos humanos no contempla las acciones civiles derivadas de los delitos o crímenes de lesa humanidad ni prohíbe o impide la aplicación del derecho interno.

Por último, plantea que el monto pedido sería excesivo, teniendo en consideración las acciones y medidas de reparación adoptadas por el Estado y los montos promedios fijados por los Tribunales de Justicia, que habrían actuado con mucha prudencia. En subsidio, señala que respecto a la regulación del daño moral debe considerarse los pagos ya recibidos de parte del Estado, conforme a las leyes de reparación N° 19.123 y 19.980. Alega la improcedencia del pago de intereses y reajustes.

Con fecha 30 de julio de 2020 la parte demandante evacúa el trámite de réplica.

En primer lugar, ratifica los fundamentos invocados en el libelo. Luego, en cuanto a la excepción de reparación integral opuesta por el Fisco, después de citar pronunciamientos de distintos Juzgados Civiles y la normativa contemplada al respecto, señala que se ha sostenido que las leyes de reparación, si bien son un reconocimiento del Estado de Chile de su deber de reparar el daño causado a víctimas de Derechos Humanos o a sus familiares directos, no constituyen impedimento, limitación o incompatibilidad per se al legítimo derecho de todo ciudadano que ha sido afectado por el actuar doloso de agentes del Estado, de obtener una indemnización por la vía jurisdiccional, distinta de una reparación de carácter asistencial, como son las que reconocen en términos generales este tipo de leyes. En efecto y sin desconocer el esfuerzo reparatorio del Estado, los beneficios y asignaciones allí contempladas tienen una naturaleza social, mas no una indemnización de daño moral sufrido por los familiares de las víctimas de violación a los Derechos Humanos, pues no aparece en la determinación de su monto que se hayan considerado los elementos propios y personales de quienes han debido soportar la pérdida de un familiar o tortura.

En cuanto a la excepción de prescripción impetrada por el demandado, ratifica lo expuesto en la demanda y agrega que tratándose la tortura de un delito de lesa humanidad, cuya acción penal persecutoria es imprescriptible, no resulta coherente entender que la acción civil indemnizatoria esté sujeta a las normas sobre prescripción establecidas en la ley civil interna, ya que ello contraría la voluntad expresa manifestada por la normativa internacional sobre Derechos Humanos, integrante del ordenamiento jurídico nacional por disposición del inciso segundo del artículo 5° de la Carta Fundamental, que consagra el derecho de las víctimas y otros legítimos titulares a obtener la debida reparación de los perjuicios sufridos a consecuencia del acto ilícito. Por consiguiente, cualquier diferenciación efectuada por el juez, en orden a separar ambas acciones y otorgarles un tratamiento diferenciado, es discriminatoria y no permite al ordenamiento jurídico guardar la coherencia que se le reclama.

Con fecha 7 de agosto de 2020 la demandada evacúa el trámite de duplica, reiterando sus defensas.

Con fecha 13 de agosto de 2020 se recibe la causa a prueba.



«RIT»

Foja: 1

Con fecha 19 de noviembre de 2021 se reanuda el término probatorio.

Con fecha 15 de febrero de 2022 se cita a las partes a oír sentencia.

**CONSIDERANDO:**

**PRIMERO:** Que del examen de los escritos de discusión, fluye que la tesis fáctica propuesta respecto de la detención ilegal, prisión y torturas sufridas por Luis Nibaldo Retamales Urtubia, producto de la acción de agentes del Estado, verificadas durante el denominado “régimen militar” o simplemente “la dictadura”, son hechos no controvertidos.

En línea con lo anterior, no se rebate que por esos motivos el actor fue calificado como víctima en el listado de prisioneros políticos y torturados, elaborado por la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, conocida como Comisión Valech I, asignándole el número 20.222.

Por lo tanto, se tiene por establecido definitivamente y desde ya que Luis Nibaldo Retamales Urtubia fue víctima de detención ilegal, prisión y tortura, al menos entre los años 1975 y 1976, en la Región Metropolitana y de Valparaíso, producto de la acción de agentes del Estado, siendo dichos actos –motivados en consideraciones políticas e ideológicas- crímenes de lesa humanidad.

**SEGUNDO:** Que, no obstante, se debe consignar que la parte demandante rindió la siguiente prueba.

1.- En folio 18, copia de sentencia de fecha 29 de noviembre de 2018, dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Órdenes Guerra y Otros vs. Chile.

2.- En folio 34, nómina de personas reconocidas como víctimas de violaciones a los Derechos Humanos e Informe elaborados por la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura.

3.- En folio 34, copia de informe psicológico de fecha 12 de julio de 2021, protocolizado ante Notaría Pública, elaborado por María Verónica Dávila León, Psicóloga, respecto de Luis Nibaldo retamales Urtubia.

4.- En folio 35, copias de sentencia de la Excma. Corte Suprema, Rol N° 16914-2018 de 27 de septiembre del año 2018; sentencia de la Excma. Corte Suprema, Rol N° 17010-2018 de 20 de septiembre del año 2018; y, sentencia de la Excma. Corte Suprema, Rol N° 29454-2018 de 24 de diciembre del año 2018.

5.- En folio 35, copia de informe denominado “Consecuencias sobre la salud en familias de ejecutados políticos”, elaborado por la Fundación de Ayuda Social de las Iglesias Cristianas.

6.- En folio 35, copia de documento denominado “Informe en términos generales sobre las secuelas dejadas en el plano de salud mental relacionadas con las violaciones a los derechos humanos cometidas durante la dictadura militar” caso: D. Hernán Díaz Jiménez, emitido por el Servicio de Salud Metropolitano Norte, Ministerio de Salud, Programa de reparación y atención integral en salud y derechos humanos – PRAIS, de 23 de septiembre de 2016.



Foja: 1

7.- En folio 35, copia de documento denominado “Situaciones represivas y experiencias traumáticas”, elaborado por la ONG ILAS en el mes de agosto de 2016.

**TERCERO:** Que, además, en el folio 28 consta el oficio ORD. DSGT N° 4792-2748, del Instituto de Previsión Social, de fecha 17 de agosto de 2021, que informa sobre “beneficios de reparación” pagados a Luis Retamales Urtubia.

En este oficio se comunica al Tribunal que el demandante, por ser víctima de Prisión Política y Tortura (Valech), recibe beneficios de reparación de las Leyes N° 19.234, 19.992, 20.134 y 20.874.

Se especifica que Luis Retamales Urtubia ha recibido por concepto de pensión Ley N° 19.234 la suma de \$36.743.245; por concepto de bono Ley N° 19.992 la suma de \$3.000.000; por concepto de aporte único Ley N° 20.874 la suma de \$1.000.000; por concepto de bono Ley N° 20.134 la suma de \$2.570.000; y por concepto de aguinaldos la suma de \$631.851; siendo el total pagado \$43.945.096 y la pensión actual de \$189.446.

Se indica también que el demandante no ha recibido otros beneficios de reparación o previsionales de ese Instituto.

**CUARTO:** Que, así las cosas, corresponde valorar las probanzas rendidas por las partes, comenzando por los instrumentos. En este sentido, no se registran impugnaciones fundadas en causal legal y acogidas respecto de ninguno de los que fueron puestos en conocimiento de la contraria, ni alegaciones respecto de las virtudes formales de los públicos. En consecuencia, se reconoce a los instrumentos señalados el valor probatorio que la propia Ley les atribuye, según su naturaleza, salvo los privados emitidos por terceros y que no fueron ratificados en el juicio, que solo se tendrán como base de una presunción judicial.

En efecto, la justificación de la verdad de los hechos controvertidos en un juicio corresponde hacerla en la forma dispuesta por el legislador. Por tanto, respecto de los instrumentos públicos, se advierte que emanan o fueron autorizados por un funcionario público, actuando en tal carácter y en materias de su competencia, contando con las formalidades que señala la ley, sin que la circunstancia de ser una copia les reste valor, precisamente por no haber sido impugnados.

De esta manera, los instrumentos públicos acompañados hacen plena fe en cuanto al hecho de haberse otorgado y su fecha, gozando de una verdadera presunción de autenticidad.

De cualquier manera y en una perspectiva general, se percibe como un hecho público y notorio que existe en la sociedad un consenso mayoritario acerca de que efectivamente se violaron los Derechos Humanos de muchas personas durante el gobierno autoritario del Pdte. A. Pinochet, conforme dan cuenta las condenas que se han sucedido desde que el país retomó el sendero democrático.

Por lo tanto, coherente con la defensa desplegada por el Fisco, no hay motivo serio y grave para dudar acerca de la verdad de los hechos relatados en estos informes, especialmente los confeccionados por la Comisión Valech, acompañados –en lo pertinente- en copia.



**QUINTO:** Que, en cuanto a las excepciones de reparación integral y pago opuestas por el Fisco, debe decirse que no consta en autos que se haya rendido prueba alguna respecto de aquello. Con todo, la defensa del actor no contravino que hayan recibido los beneficios y transferencias que señala el Fisco en su contestación, por ser una consecuencia necesaria del hecho de haber sido incluido en la nómina del informe realizado por la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura.

**SEXTO:** Que, sin perjuicio de lo anterior, no debe olvidarse que el hecho fundante de la responsabilidad pretendida es un delito de lesa humanidad, esto es, aquellos actos que la Convención sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de los crímenes de lesa humanidad considera cometidos *“como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque”*, incluyendo asesinato, exterminio, prisión arbitraria, violación, tortura, persecución política, desaparición forzada y otros actos inhumanos graves, calificación jurídica que no fue objeto de debate entre las partes, motivo por el cual se debe atender a los principios generales del derecho internacional de los derechos humanos, integrados a nuestra legislación interna por disposición del artículo 5° de la Constitución Política de la República, que consagra el derecho de las víctimas y otras personas a obtener la reparación de los perjuicios sufridos a consecuencia del acto ilícito, puesto que *“el ejercicio de la soberanía reconoce como limitación el respeto de los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana”*.

En este sentido, conviene recordar que los artículos 1.1 y 63.1 del Pacto de San José de Costa Rica, publicado el 5 de enero de 1991, establecen lo siguiente:

*“Los Estados Partes en esta Convención se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social”. “Cuando decida que hubo violación de un derecho o libertad protegidos en esta Convención, la Corte dispondrá que se garantice al lesionado en el goce de su derecho o libertad conculcados. Dispondrá asimismo, si ello fuera precedente, que se reparen las consecuencias de la medida o situación que ha configurado la vulneración de esos derechos y el pago de una justa indemnización a la parte lesionada”.*

Por lo tanto, se constata una clara divergencia entre el contenido de las excepciones señaladas y lo dispuesto por la Convención Americana, debiendo estarse a esta última, atendida la naturaleza del ilícito, por cuanto la responsabilidad del Estado queda sujeta -en estos casos- a las reglas del derecho internacional, que excluyen –en todo aquello que sean contrarias a éste- las del derecho interno.

En consecuencia, atendido además que las leyes invocadas por la defensa fiscal no establecen verdaderas indemnizaciones sino que un conjunto de derechos y/o beneficios para las víctimas y sus familiares, como ocurre con las pensiones de reparación, medidas con las que el Ejecutivo y el Legislativo han



Foja: 1

intentado progresivamente hacerse cargo de un problema esencialmente humanitario, político y, en definitiva, histórico, no se avizora la existencia de incompatibilidad alguna con la indemnización pretendida en sede judicial, por ser diferente, siendo importante consignar que no está prohibido otorgarla y que así se ha hecho en múltiples sentencias.

**SEPTIMO:** Que, en base a los mismos argumentos, debe agregarse que la imprescriptibilidad de la acción penal trae como consecuencia la imposibilidad de declarar la prescripción de la acción civil, producto del transcurso del tiempo, desde que el hecho generador de la responsabilidad es al mismo tiempo un delito de lesa humanidad, vale decir, no un ilícito civil cualquiera. De otra manera resultaría que se permite perseguir en todo tiempo y lugar estos crímenes, pero no así la responsabilidad civil, lo que no se entiende si se considera que evidentemente la responsabilidad penal es de mayor entidad que la patrimonial.

Por lo tanto y como este Tribunal ha señalado en pronunciamientos anteriores, aplica aquello de que quien puede lo más, puede lo menos, no pareciendo razonable un sistema que desintegre las responsabilidades que emanan de un mismo hecho, cuando éste tiene la connotación aludida con anterioridad.

**OCTAVO:** Que, así las cosas, descartadas las excepciones opuestas por la demandada, cabe destacar que respecto del daño moral la Excma. Corte Suprema lo ha conceptualizado como: *“un mal, un perjuicio o una aflicción en lo relativo a las facultades espirituales, vale decir, cuando se ocasiona a una persona un dolor o aflicción en sus sentimientos” (R.D.J., T. LXVIII, secc. 4ª, pág. 168). Asimismo, ha sentenciado lo siguiente: “Que el daño moral, como todo daño, debe ser probado por quien sostiene haberlo padecido; al menos cuando es la base de la obligación de repararlo, conforme al artículo 1698 del Código Civil. Sin embargo, en determinadas situaciones, por la naturaleza y características del daño material producido, particularmente cuando se trata de daño corporal, el daño moral es tan natural y perceptible en la víctima que es del todo razonable presumirlo. Así también ha sido resuelto (por ejemplo, Corte Suprema, rol 735-2015). En estas circunstancias se produce una alteración del peso de la prueba en cuanto, debiendo la víctima probar el daño, es el demandado quien tendría que probar que, debido a ciertos hechos o circunstancias, la víctima no sufrió efectivamente el daño que postula” (Rol N° 12.176-2017).*

Pues bien, el presente caso es justamente uno de aquellos en que *“el daño moral es tan natural y perceptible en la víctima que es del todo razonable presumirlo”*. En efecto, se trata del caso de un joven dirigente sindical de poco más de veinte años, sometido a detención sorpresiva, prisión injustificada y, especialmente, vejaciones y torturas nefastas, como el tiempo que debió permanecer a oscuras, desnudo y oyendo otras sesiones de tormentos, en la tenebrosa “Villa Grimaldi”, siendo víctima de maltratos físicos y psicológicos, suplicio que dejó una huella indeleble en su vida, que con el paso del tiempo no ha conseguido sanar del todo.

Tales tratos, por cierto degradantes, que son consecuencia del actuar coercitivo de agentes del Estado, cuyo deber funcionario en ningún caso ni



«RIT»

Foja: 1

momento validó la adopción de procedimientos y medidas como las operadas en esta persona, abusando de una posición de poder y engendrando en la víctima una sensación de vulneración, despojo e incertidumbre persistente, que razonablemente no pueden tenerse como inermes o carentes de carga emocional, son un elemento definitivamente esclarecedor de lo que podría retratarse como una auténtica desdicha personal, por lo que al tenor de lo que disponen los artículos 426 del Código de Procedimiento Civil y 1712 del Código Civil, se presume que el actor fue lesionado en su esfera inmaterial y en magnitud importante, abusos que terminaron por consumirlo en la desazón.

No podría concluirse de otra manera, desde que el Estado de Chile ha reconocido oficialmente al demandante como víctima de prisión política y tortura, a partir de lo cual y en conjunto con los otros antecedentes adjuntados al proceso, y, especialmente, que estos hechos no fueron contradichos en el juicio en cuanto a su ocurrencia, solo cabe creer en la versión entregada, y en relación al dolor moral invocado, tenerlo por serio y grave, por no poder esperarse otra cosa.

Pues bien, conforme al juzgamiento efectuado por el Tribunal de los hechos narrados y la afectación del demandante en su dimensión inmaterial, que se aprecia como duradera, se concluye en justicia el otorgamiento de una satisfacción de reemplazo, que en prudencia y equidad, a la luz del mérito de los antecedentes, se determina en la suma única y total de \$60.000.000, que se deberá pagar más reajustes e intereses legales, desde que esta sentencia resulte ejecutoriada.

**NOVENO:** Que los documentos no considerados especialmente en nada inciden o alteran la decisión que se hará, siendo innecesarios, debiendo estarse a su valoración y a las razones por las que se acogerá la presente demanda.

**DECIMO:** Que no se condenará en costas a la parte demandada, por estimarse que litigó con motivo plausible.

Por estas consideraciones y visto además lo dispuesto en los artículos 5° y 6° de la Constitución Política de la República; I. b) de la Convención sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de los crímenes de lesa humanidad; 7.1 del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional; 1437, 1698, 1699, 1700, 1702, 1706, 2314 y siguientes, 2514 y 2515 del Código Civil; y 144, 170, y 342 del Código de Procedimiento Civil, se declara:

I. Que se rechazan las excepciones de reparación integral, pago y prescripción alegadas por la parte demandada.

II. Que se acoge la demanda, solo en cuanto se condena a la parte demandada a pagar \$60.000.000 al demandante, por concepto de indemnización por daño moral, más reajustes e intereses.

III. Que no se condena en costas.

Regístrese, notifíquese y oportunamente archívese.

Rol C-5583-2020



«RIT»

Foja: 1

**DICTADA POR DON MATIAS FRANULIC GOMEZ, JUEZ TITULAR DEL  
VIGESIMO NOVENO JUZGADO CIVIL DE SANTIAGO.**

Se deja constancia que se dio cumplimiento a lo dispuesto en el inciso final del art. 162 del C.P.C. en **Santiago, veintiuno de Febrero de dos mil veintidós**

